

C.A. de Santiago.

Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.

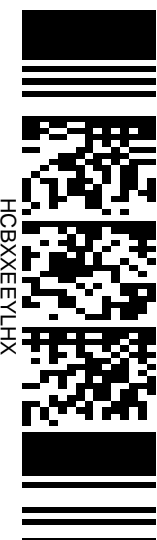
Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Juan Pablo Solorza Kojakovic, abogado, en representación de **Compañía General de Electricidad S.A. (CGE)**, quien conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°18410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, interpone reclamación de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N°13017 de 05 de julio de 2022 y de la Resolución Exenta N°35461, de 21 de septiembre de 2022, ambas de la **Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)**, mediante las cuales se aplica a su representada una multa de 1000 UTM, solicitando se deje sin efecto dichas resoluciones, con expresa condena en costas.

Como antecedentes de la reclamación, señala que mediante Oficio Ordinario Electrónico N°102366, de fecha 21 de enero de 2022, la reclamada formuló el siguiente cargo a su representada: *“Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19° del Decreto Supremo N°244, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, modificado mediante Decreto Supremo N°101 de 2014, del Ministerio de Energía, en relación con el artículo 149° del DFL N°4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, infracción que se configura al responder las solicitudes de correcciones de los Informes de Criterios de Conexión de los PMGD indicados en el numeral 3 del presente oficio, en un plazo superior a diez días hábiles contados desde la fecha de recepción de dichas observaciones”*. Lo anterior respecto a los siguientes procesos de conexión de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD): i. Proceso de Conexión N°17450 referente a PMGD FV Huingán. ii. Proceso de Conexión N°3972 referente a PMGD FV Azapa Norte. iii. Proceso de Conexión N°4507 referente a PMGD FV Río Lluta Sur. iv. Proceso de Conexión N°18417 referente a PMGD FV Las Chilcas. v. Proceso de Conexión N°13353 referente a PMGD FV El Peral Uno.

Indica que, en síntesis, la SEC reprocha que se respondieron las solicitudes de correcciones al Informe de Criterios de Conexión (ICC) en un plazo superior a diez días desde la fecha de su recepción, en conformidad al procedimiento de conexión de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) que se encontraba establecido en el Decreto Supremo N°244 de 2005 que aprueba el reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios de generación establecidos en la ley general de servicios eléctricos.

Manifiesta que su representada presentó escrito de descargos en el procedimiento sancionatorio, y no obstante ello, la SEC la sanciona mediante la



Resolución Exenta N°13017 condenándola a una multa de 2.500 UTM; contra dicha sanción se presentó recurso de reposición, y luego la SEC dictó la Resolución Exenta N°35461 que admitió parcialmente la reposición interpuesta, rebajando la multa a 1000 UTM , considerando la autoridad que solamente se había infringido la normativa respecto de dos proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD), que son el Proceso 13353 FV El Peral Uno y el Proceso 4507 FV Río Lluta Sur.

En cuanto a los fundamentos del recurso de reclamación, expone:

En primer término acusa una infracción de motivación. Indica que el Oficio Ordinario N°102366 resuelve formular cargos determinando que las normas transgredidas son los artículos 19° del Decreto Supremo N°244 de 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, modificado mediante Decreto Supremo N°101 de 2014, del Ministerio de Energía, en relación con el artículo 149° del DFL N°4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Luego, para fundamentar su decisión, la Resolución Exenta N°13017 recurrida menciona en diversos apartados que la sanción se fundamenta en la normativa contenida en el Decreto Supremo N°88 que aprueba reglamento para medios de generación de pequeña escala.

De lo anterior, se advierte la falta de precisión en las normas transgredidas, toda vez que, de la comparación entre lo señalado por la Formulación de Cargos y la decisión de la SEC en la resolución recurrida, se logra evidenciar que la primera de éstas alega una infracción al *artículo 19° del Decreto Supremo N°244, de 2005*, mientras la segunda, invoca el *artículo 62° Decreto Supremo N°88* que aprueba reglamento para medios de generación de pequeña escala, lo cual afecta la motivación del acto terminal como el derecho al debido proceso de su representada.

Añade que, en ese contexto, la principal norma en la que fundamenta la SEC su sanción es el artículo 19° del Decreto Supremo N°244, normativa que fue derogada mediante Decreto Supremo N°88 de 2019, publicado el 08 de octubre de 2020, comenzando su vigencia el 08 de noviembre de 2020, circunstancia que fue representada en el recurso de reposición, por lo que la propia administración dejó sin efecto la sanción relativa a los procesos 18417 FV Las Chilcas, 3972 FV Azapa Norte y 17450 FV Huingán dada la derogación de la norma a la época del incumplimiento, pero persevera con la sanción respecto de los procesos N°13353 FV El Peral Uno y N°4507 FV Río Lluta Sur, por cuanto a su parecer el Decreto Supremo N°244 se encontraba vigente a la fecha del incumplimiento, mas no a la época de la formulación de cargos ni menos a la de la sanción aplicada.



Así, la SEC como organismo público tuvo que haber realizado un estudio de la norma en la cual sustenta su acusación, considerando la existencia de la nueva regulación, con el objeto que su representada hubiera conocido efectivamente cual norma es la que se acusa haber transgredido, esto es, la norma del artículo contenido en el Decreto Supremo N°244 -derogada- o la del Decreto Supremo N°88, actualmente vigente, omisión que, afirma, es una infracción al debido proceso y la motivación del acto sancionador, existiendo en la sanción aplicada un error de derecho que afecta la motivación del mismo, y que constituye un vicio esencial, sólo reparable con la absolución a su representada de los cargos efectuados.

En segundo lugar dice que SEC estaba obligada a hacerse cargo de todos los antecedentes presentados lo que no hizo. Manifiesta que la reclamada no se hizo cargo de las alegaciones presentadas, pues se le representó a la autoridad que todos los proyectos por el cual se impuso la multa son efectuados por el mismo desarrollador DECAPITAL, siendo solamente un desarrollador que inició el proceso de interconexión de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD), lo que permite sustentar que no es efectiva la magnitud que pretende atribuir la reclamada. Agrega que dicha alegación constaba en el proceso, pero la administración no se refiere a ella en la resolución que resuelve el recurso de reposición, por lo que el hecho que la Resolución reclamada no se pronunciara de las alegaciones o defensas infringe el artículo 17 letra f) de la Ley N°19.880, no constituyendo un aspecto discrecional de la administración el decidir si reflexiona o no respecto de las alegaciones del interesado, por el contrario, dicha reflexión debe siempre existir ya que constituye un deber legal de la administración y, correlativamente, un derecho del administrado.

En tercer lugar acusa una infracción a la proporcionalidad de la Resolución Exenta N°13017. Señala que la autoridad producto de la supuesta infracción cursó una multa de 1000 UTM, considerando que solamente se habría infringido la normativa respecto de dos proyectos, que con el Proceso 13353 FV El Peral Uno y el Proceso 4507 Fv Río Lluta Sur, aplicando el máximo quantum establecido por el legislador para las sanciones de carácter leve, siendo la principal justificación para la aplicación de dicha elevada suma la cantidad de usuarios afectados, cuando el desarrollador era solamente uno. Por su parte, la Resolución Exenta N°35461 agrega que igualmente se debe aplicar la elevada multa de 1000 UTM en razón de que la demora en la respuesta al informe de criterio de conexión supuestamente entorpece el desarrollo de energías renovables en el país.

Refiere que en dicho contexto, en relación a El Peral Uno Proceso N°13353 no existieron más solicitudes de conexión a la red que pudieran haberse visto



afectadas, por lo que no existe menoscabo al desarrollo de las energías renovables; en relación a Río Lluta Sur Proceso N°4507, el reparo del requirente sólo hace referencias a aspectos del informe de costos y no objetan información técnica del Informe de Criterios de Conexión o de sus obras, razón por la que se consideró la solicitud de conexión técnicamente resuelta y se procedió a avanzar en la fila del alimentador a fin de no perjudicar a procesos de terceros. De lo anterior, no se identifica que se haya perjudicado ni menos entorpecido el desarrollo de energías renovables en el país que acusa la autoridad, por lo que los elementos para determinar el quantum de la multa no fueron apreciados en su especie de acuerdo a nuestro ordenamiento.

Sostiene que, en primer lugar, debió considerarse por la SEC el real número de afectados el que es un solo desarrollador; en segundo lugar, el desinterés del solicitante en algunos proyectos; y por último, el estado actual de aquellos que no se interfirió en el sistema de conexiones de Pequeños Medios de Generación Distribuidos; por consiguiente, en razón del principio de proporcionalidad solamente cabría determinar que en atención al menor número de clientes afectados, la inexistencia de daño y la conducta de su representada en la prosecución de los proyectos que el solicitante tiene interés de conectar, que la sanción adoptada sea una amonestación, o en su defecto, el quantum de la multa sea menor a los que discrecionalmente se adopta.

Por lo expuesto, y las normas legales que invoca, solicita: **1)** Que se declaren ilegales las Resoluciones Exentas N°13017 y N°35461 de la SEC por no ajustarse a la Constitución, la Ley General de Servicios Eléctricos, sus reglamentos y demás disposiciones que le corresponde aplicar, dejándolas en consecuencia sin efecto; **2)** Que se absuelve a CGE de los cargos formulados en su contra; y **3)** Que se condena expresamente en costas a la SEC. **En subsidio**, solicita rebajar significativamente el monto de la multa impuesta al mínimo que estime procedente y proporcional al hecho que se imputa a su representada.

Segundo: Que, evacuando el traslado por la **Superintendencia de Electricidad y Combustibles**, comparece doña Marta Cabeza Vargas, Superintendente de Electricidad y Combustibles, quien en relación a la reclamación de ilegalidad formulada por la reclamante, sostiene que dicha acción es absolutamente infundada, por cuanto lo obrado por el Servicio en la expedición del acto administrativo impugnado se ajusta en plenitud a la legalidad vigente y a estrictas consideraciones de racionalidad, que en nada vulnera los principios y normas invocados por la reclamante.

Refiriéndose al marco normativo aplicable a la reclamación deducida, manifiesta que con ocasión de la resolución de una serie de reclamos presentados



en contra de la actora, Compañía General de Electricidad S.A., al amparo del procedimiento de controversias de procesos de conexión de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD), se constató infracciones por parte de la reclamante al artículo 19° del Decreto Supremo N°244 en relación con el plazo para responder las solicitudes de correcciones al Informe de Criterios de Conexión (ICC) de cinco proyectos, a saber: Huingán, Azapa Norte, Río Lluta Sur, Las Chilcas y El Peral Uno.

Luego de analizada la información disponible, mediante Oficio Ordinario N°102366, de fecha 21 de enero de 2022, procedió a formular cargos por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19° del Decreto Supremo N°244, en relación con el artículo 149° de la Ley General de Servicios Eléctricos. Indica que analizados los descargos presentados por la reclamante, mediante Resolución Exenta N°13017, de fecha 05 de julio de 2022, sancionó a la reclamante con una multa de 2.500 UTM.

Habiéndose presentado recurso de reposición en contra de dicha Resolución, y efectuado un nuevo análisis de las alegaciones, mediante Resolución Exenta N°35461, de fecha 21 de septiembre de 2022, acogió parcialmente el recurso deducido por la afectada, rebajando la multa impuesta a 1.000 UTM, toda vez que se dejó sin efecto la infracción respecto de 3 proyectos Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) y se mantuvo la imputación sólo respecto de 2 procesos de conexión: Río Lluta Sur y El Peral Uno.

En cuanto a las alegaciones de la reclamante, afirma que los hechos constitutivos de la infracción se encuentran plenamente acreditados, toda vez que la reclamante ha incumplido la obligación de responder en un plazo no superior a diez días contados desde su recepción, las solicitudes al Informe de Criterios de Conexión (ICC) de los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) FV Río Lluta Sur y FV El Peral Uno, lo que representa un actuar negligente inexcusable por parte de la empresa en cuestión, teniendo en consideración que la normativa es clara en imponer la obligación a las empresas distribuidoras de permitir la conexión de los proyectos Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) a sus instalaciones cuando se cumplan los requisitos para ello, lo que implica responder las solicitudes de corrección al Informe de Criterios de Conexión dentro de los plazos establecidos en el Reglamento.

En cuanto a las razones por las cuales el recurso de reclamación debe ser rechazado, señala:

Primero acusa una falta de agravio para reclamar de ilegalidad. Indica que al recurrir administrativamente la reclamante, solicitó que se “*absuelva a mi representada de la multa impuesta por las razones de hecho y derecho expuestas,*



y en subsidio de lo anterior, sustituirla por amonestación o rebaje la multa”, y la pretensión subsidiaria fue acogida, toda vez que mediante Resolución Exenta N°35461 se rebajó la multa impuesta a 1.000 UTM, dejándose sin efecto la infracción respecto de 3 proyectos Pequeños Medios de Generación Distribuidos, manteniéndose la imputación sólo respecto de 2, por lo que en el caso concreto no existe agravio para reclamar de ilegalidad.

Enseguida, se hace cargo de la infracción a la motivación del acto sancionatorio. Señala que dicha alegación es infundada. Hace presente que los actos reclamados han sancionado a la reclamante por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en relación con el artículo 19° del Decreto Supremo N°244. Así, el núcleo esencial de la conducta sancionada está descrito en la norma legal respectiva, es decir, el artículo 149° de la Ley Eléctrica.

Refiere que la falta al deber de motivación que alega la reclamante se funda en la errónea aplicación, a su juicio, de la norma del artículo 19° del Decreto Supremo N°244, la cual se encontraría derogada por el Decreto Supremo N°88 al momento de formular cargos, y frente a ello es necesario dejar establecido que la norma del artículo 19° del Decreto Supremo N°244 fue reemplazada por el artículo 62° del Decreto Supremo N°88 (vigente desde el 20 de noviembre de 2020), el que replica la obligación de las empresas distribuidoras de responder las solicitudes de corrección a los Informes de Criterios de Conexión que realicen los interesados. Sin perjuicio de que la infracción se configura igualmente ya sea bajo la vigencia del Decreto Supremo N°244 o del Decreto Supremo N°88, la Superintendencia dejó sin efecto la infracción respecto de los procesos de conexión de los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD)Huingán, Azapa Norte y Las Chilcas, toda vez que a la fecha de incumplimiento de dichos proyectos la norma del artículo 19° del Decreto Supremo N°244 se encontraba derogada, manteniendo vigente la imputación solo respecto de 2 procesos de conexión: FV Río Lluta Sur y FV El Peral Uno.

Posteriormente se refiere a la supuesta falta de análisis de los descargos de Compañía General de Electricidad S.A. Afirma que todas las alegaciones y defensas efectuadas por la reclamante en el procedimiento administrativo fueron debidamente analizadas en los actos reclamados. Asimismo, la alegación referida a la titularidad de los proyectos se hizo presente recién en la etapa recursiva como parte de las alegaciones de proporcionalidad, recurso que fue parcialmente acogido, rebajándose la multa aplicada en un 60% precisamente porque se tuvo en consideración que los proyectos afectados por la infracción fueron 2. Agrega que la alegación de fondo que en ese punto efectúa la reclamante es totalmente



carente de fundamento, toda vez que las circunstancias del daño causado o de los clientes afectados por la infracción en ningún caso pueden verse supeditadas a quienes sean los desarrolladores de los proyectos, sino que deben ser evaluadas sobre la base de la cantidad efectiva de proyectos Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) que se vieron impedidos de tramitar su proceso de conexión en los plazos que establece la normativa por el actuar negligente de la reclamante.

Finalmente se hace cargo de la supuesta infracción al principio de proporcionalidad. La reclamante sostiene, en primer término, que la Superintendencia, al haber aplicado una multa de 1.000 UTM, estaría aplicando *“el máximo quantum establecido por el legislador para las sanciones de carácter leve”*, transgrediendo el principio de proporcionalidad. Sin embargo, dicha alegación es falsa, pues según lo dispuesto en el artículo 16A de la Ley N°18.410 las infracciones de carácter leve pueden ser sancionadas con multa de hasta 6.000 UTM, por lo que se ha aplicado el rango más bajo de sanción dentro del establecido en la ley.

Por otra parte, la reclamante sostiene que, al tratarse de proyectos gestionados por un solo desarrollador, se debió rebajar la multa impuesta, alegación que es errada, dado que las circunstancias del daño o peligro ocasionado y la cantidad de usuarios afectados por la infracción deben evaluarse en base a cada proyecto y no en base a quienes era sus desarrolladores, toda vez que la promoción de generación de energía eléctrica a través de medios renovables no convencionales se concreta a través de cada proyecto que se conecta al sistema y no a través de quienes sean sus desarrolladores.

Citando fallos de la Excm. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones de Santiago, concluye que la Superintendencia, al dictar el acto administrativo impugnado ha fundado debidamente el acto administrativo y aplicado cada uno de los parámetros que la normativa contempla que deben ser considerados para determinar la sanción y su quantum, no advirtiéndose cómo los actos recurridos pudieran importar violación a las garantías, principios y normas invocados por la reclamante, por lo que procedería que la acción de reclamo deducida sea rechazada en todas sus partes por ser infundada y carecer de sustento válido para su interposición, con costas.

Tercero: Que el artículo 19 de la Ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, permite a los afectados por una decisión del órgano regulador reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Dentro de este contexto CGE deduce reclamo por la sanción de 1000 UTM que se le impuso, circunscribiendo su reclamo, en síntesis a tres argumentos, a



saber: cuestiona una falta de motivación de la sanción, no haberse hecho cargo de todas sus alegaciones y, finalmente una infracción a la proporcionalidad de la multa impuesta.

Por su parte la Superintendencia además de rebatir estos tres argumentos, cuestiona la procedencia del reclamo, pues dice que no existe agravio de la reclamante al haberse acogido su pretensión de rebaja de multa en sede administrativa.

De esta forma, delimitada la controversia ante esta Corte, se emitirá pronunciamiento sobre dichas alegaciones.

I.- En cuanto a la falta de agravio invocada por la SEC

Cuarto: En cuanto a la falta de agravio que haría improcedente el reclamo de CGE, lo que plantea la Superintendencia es que la reclamante no tiene perjuicio pues cuando decidió ejercer en sede administrativa el recurso de reposición en contra de la primitiva sanción, la afectada pidió absolución o en subsidio, rebaja de la multa logrando finalmente dicha pretensión subsidiaria.

Sobre el particular, la norma del artículo 19 de la Ley N° 18.410 expresamente señala que los afectados que estimen que una resolución de la Superintendencia no se ajusta a la ley pueden reclamar ante el órgano jurisdiccional cuestión que va ligada con el derecho a la tutela judicial efectiva. Dentro de esa perspectiva, es cierto que la reclamante obtuvo una rebaja de la sanción más no logró su objetivo principal que era la absolución de los cargos que se le formularon, por lo que nada impide que pueda insistir en ello con el objeto que esta Corte revise su procedencia, respetando lo que ya se logró en la fase administrativa, es decir, la reducción de la multa en su monto o reducirla aún más.

En consecuencia, la alegación de falta de agravio ha de ser desechada.

II.- Breve referencia al marco normativo aplicable.

Quinto: Que para comprender el asunto debatido conviene precisar que la norma sectorial establece que las empresas distribuidoras -como lo es CGE- deben permitir la conexión a sus instalaciones de los que se denominan Pequeños Medios de Generación Distribuidos o PMGD cuando estos se conecten mediante líneas propias o de terceros.

Es decir, se trata de terceros que distribuyen energía a menor escala que las grandes empresas distribuidoras y para lo cual se conectan a las instalaciones de distribución de las concesionarias todo lo que debe realizarse cumpliendo con las correspondientes medidas de seguridad.

Sexto: Ahora bien, la conexión de estos PMGD a las instalaciones de las empresas distribuidoras se encuentra regulada en la Ley General de Servicios Eléctricos, en especial, en el inciso sexto del artículo 149 que dispone lo siguiente:



*“Los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad, así como aquellas empresas que posean líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público, deberán permitir la conexión a sus instalaciones de distribución correspondientes de los medios de generación o sistemas de almacenamiento cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9.000 kilowatts, **sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad de servicio vigentes**. Las obras adicionales que sean necesarias para permitir la inyección de dichos excedentes de potencia deberán ser ejecutadas por los propietarios de los sistemas de distribución correspondientes y sus costos serán de cargo de los propietarios de los medios de generación o sistemas de almacenamiento indicados, conforme a las modalidades que establezca el reglamento. Para el cálculo de estos costos se considerarán tanto los costos adicionales en las zonas adyacentes a los puntos de inyección, como los ahorros de costos en el resto de la red de distribución, conforme a los procedimientos que para ello establezca el reglamento. El valor de estas instalaciones adicionales no se considerará parte del valor nuevo de reemplazo de la empresa distribuidora correspondiente.”*

Pues bien, para dar cumplimiento a las exigencias de seguridad y calidad de servicio que establece la ley, se dictó a nivel reglamentario el Decreto Supremo N° 244 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Decreto que fue reemplazado por el Decreto Supremo N° 88 de 2019, del Ministerio de Energía, de 8 de octubre de 2020, denominado Reglamento para Medios de Generación de Pequeña Escala.

Séptimo: Que dentro del contexto descrito y dentro del ámbito de seguridad se sostiene que las empresas distribuidoras deben emitir un Informe de Criterios de Conexión que permite la conexión y operación del PMGD a las instalaciones de distribución.

En relación a estos informes, el Decreto Supremo N° 244 que “Aprueba Reglamento para Medios de Generación no convencionales y Pequeños medios de Generación establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos” de 17 de enero de 2006 –hoy derogado a contar del 8 de octubre de 2020- establecía, en su artículo 19 lo siguiente: “(...) *en caso de disconformidad del interesado o propietario de un PMGD respecto del ICC o del informe señalado en el artículo 32° del presente reglamento, éste podrá presentar una solicitud de correcciones a dichos informes, en la cual incluya los antecedentes que fundamentan su disconformidad. Dicha solicitud deberá ser remitida tanto a la empresa distribuidora como a la Superintendencia, en un plazo máximo de veinte días contado desde la recepción de los informes emitidos por la empresa distribuidora.*



Luego, la empresa distribuidora deberá responder la solicitud de correcciones en un plazo no superior a diez días contado desde la fecha de su recepción.”

Por su parte el Decreto Supremo N° 88, que “Aprueba Reglamento para Medios de Generación de Pequeña Escala” del Ministerio de Energía, de 8 de octubre de 2020, en su artículo 62° prescribe que: ***“Una vez emitido el ICC por parte de la Empresa Distribuidora y en un plazo no superior a veinte días desde su comunicación, el Interesado deberá manifestar su conformidad con éste o solicitar a la Empresa Distribuidora modificaciones o aclaraciones, las que deberán ser respondidas por la señalada empresa dentro de los veinte días siguientes. En este caso, el Interesado deberá manifestar su conformidad con el ICC dentro de los veinte días siguientes a partir de la comunicación de la respuesta por parte de la Empresa Distribuidora. Junto a la manifestación de conformidad antes señalada, el Interesado deberá adjuntar el contrato de Obras Adicionales, Adecuaciones y Ajustes firmado, en los casos que corresponda.”***

III.- De los cargos que se hizo a CGE

Octavo: En su oportunidad, SEC constató infracciones por parte de CGE S.A en relación con el plazo para responder las solicitudes de correcciones al Informe de Criterios de Conexión de cinco proyectos PMGD, a saber: Huingán, Azapa Norte, Río Lluta Sur, Las Chilcas y El Peral Uno. Decidiendo sancionarla con una multa de 2500 UTM la que luego de la reposición deducida se rebajó a 1000 UTM solo por infracción relacionada con los Proyectos Lluta Sur y El Peral.

IV.- En cuanto a la alegación de falta de motivación:

Noveno: Que establecido el marco normativo relevante y la situación fáctica relacionada con el proceso sancionatorio seguido en contra de CGE corresponde hacerse cargo de la alegación que hace la reclamante en cuanto sostiene que existe una falta de motivación de la resolución sancionatoria pues los cargos que se formularon aludían al artículo 19 del Decreto Supremo N° 244 y, en cambio, la sanción, refiere el artículo 62 del Decreto N° 88. Estima que existe así una imprecisión de la normativa aplicable y que se citó una norma ya derogada como lo es el Decreto Supremo N° 244.

Décimo: Que la falta de motivación debe ser desechada. En efecto, el cuestionamiento fáctico que se hizo a la reclamante fue imputarle un “Incumplimiento del artículo 19° del DS 244 en relación al plazo para responder las solicitudes de correcciones al Informe de Criterios de Conexión (“ICC”), respecto de los siguientes procesos de conexión...” detallándose cinco procesos de conexión.



Detallado cada proceso de conexión, la reclamante demoró meses en responder las solicitudes de corrección, en circunstancias que la normativa -DS. 244- le daba un plazo de diez días.

Es cierto que dicho Decreto Supremo fue derogado en octubre de 2020, pero la nueva normativa -DS 88- contemplaba la misma obligación pero otorgando un plazo de 20 días.

Así una vez ejercido el derecho de reponer, la SEC aceptó el argumento del reclamante en cuanto a que se estaba aplicando una normativa derogada como lo era el DS 244 respecto de tres proyectos, pero mantuvo el reproche de dos proyectos en los cuales a la fecha de los hechos estaba vigente el mencionado DS 244.

Lo anterior entonces, se aleja de una ausencia de motivación por cuanto el reproche ya sea por uno u otro Reglamento es siempre el mismo, esto es, la demora en evacuar las respuestas respectivas, cuestión que debía hacerse en un tiempo de días y no de meses como se hizo.

Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que al evacuar los descargos la reclamante reconoció el retraso en evacuar los informes respectivos, pero aludió a diversas razones que, en su concepto, justificaron la tardanza, por lo que la decisión de sanción, por los dos proyectos por las que se mantuvo –El Peral I y Ríos Lluta Sur- contiene los argumentos de hecho y de derecho que cumplen con la obligación de motivación de todo acto administrativo.

V.- En cuanto a que SEC no se habría hecho cargo de todas las alegaciones de la reclamante:

Undécimo: Que lo que aquí se cuestiona es una infracción a la Ley de Procedimientos Administrativos, que en su artículo 17 letra f) obliga a la autoridad a hacerse cargo de todas las alegaciones o defensas del administrado, indicando que la resolución que resuelve la reposición no consideró la alegación que todos los proyectos por el cual se impuso la multa son efectuados por el mismo desarrollador DECAPITAL por lo tanto entiende que la magnitud de la infracción que se imputa no es tal.

Pues bien, esta alegación que hace la reclamante surgió en la etapa recursiva intentando con ello disminuir la gravedad o magnitud de la infracción, más tal alegación no conduce a la absolución de los cargos formulados sino a lo más, a una disminución de la sanción impuesta. Dentro de esa óptica tiene razón la SEC cuando dice que la propuesta de rebaja de sanción fue acogida considerándose que de los cinco proyectos que motivaron el inicio del procedimiento sancionatorio, finalmente solo se mantuvo el reproche por dos, de tal suerte que la ausencia de referencia expresa a la titularidad de los proyectos no



incide en el resultado de la sanción, pues no se ve cómo podría influir en el reproche que el titular de los cinco proyectos o de los dos por los que finalmente se sancionó sea el mismo, si los proyectos son distintos entre sí y abarcan zonas geográficas distintas.

En consecuencia, el reproche que se hace debe ser desestimado.

VI.- En cuanto a la falta de proporcionalidad de la sanción:

Duodécimo: Que finalmente se reclama sobre la proporcionalidad de la sanción en relación a la falta imputada e indica la reclamante que se aplicó la máxima sanción para una infracción leve y sostiene que en el caso del Proyecto El Peral no hubo menoscabo al desarrollo de energías renovables porque no hubo más solicitudes de conexión que podrían verse afectadas y en el caso del Proyecto Ríos Lluta solo existió reparo de costos y no técnicos por lo que se consideró la solicitud de conexión.

Décimo tercero: Que en cuanto al monto de la multa, la sanción aplicada de 1000 UTM no corresponde al máximo de la impuesta por el legislador para infracciones leves, pues el artículo 16A de la ley 18.410 fija un rango de hasta 500 Unidades Tributarias Anuales, es decir, el equivalente a 6000 UTM.

En relación al argumento de la supuesta falta de menoscabo en el desarrollo de los proyectos, tal predicamento debe ser desechado pues la excesiva demora en la evacuación de los informes (9 meses en el caso de Río Lluta y 8 meses en el caso de El Perla) importa una tardanza al concretar los proyectos y aceptar el argumento del reclamante implica soslayar el Reglamento que rige la materia, por lo que la sanción aplicada finalmente se ajusta a derecho.

Décimo cuarto: Que así, el reclamo de ilegalidad que interpuso CGE será rechazado en todas sus partes.

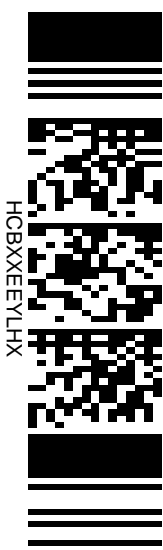
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410 **se rechaza en todas sus partes**, el reclamo presentado por Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), en contra de la Resolución Exenta N°13017 de 05 de julio de 2022 y de la Resolución Exenta N°35461, de 21 de septiembre de 2022, ambas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Contencioso Administrativo N°529-2022.





HCBXXEY LHX

Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M., Ministra Suplente Isabel Margarita Zuñiga A. y Abogado Integrante Sebastian Ramon Hamel R. Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

